REFLEXIONES SOBRE POSIBLES REFORMAS A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL

**Presentadas por el Dr. Eduardo Andrade Sánchez
Catedrático y autor de diversas obras sobre
Derecho Electoral y Constitucional.**

Agradezco a la Comisiones Legislativas participantes y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión esta invitación para participar en los Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, los cuales constituyen una excelente oportunidad para revisar una vez más las reglas que rigen no solamente nuestro proceso de elección de autoridades, sino algunos de los efectos nocivos que se perciben en el sistema político constitucional, entre los cuales me parecen de una enorme relevancia las diferencias crecientes entre las autoridades electorales —tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— y las Cámaras del Congreso de la Unión. Estos enfrentamientos son altamente preocupantes porque inciden en un área particularmente sensible del equilibrio constitucional: el principio fundamental del constitucionalismo occidental que es la División de Poderes.

Delimitación de facultades de las autoridades electorales

El cumplimiento de este principio debe garantizar que las autoridades electorales no intenten legislar en sustitución de los congresos. El método adoptado por tales autoridades, pretende justificarse en virtud de la previsión del Art. 1º constitucional que impone a “todas las autoridades” la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, pero con frecuencia olvidan que la Norma Suprema limita expresamente tal obligación a que la autoridad de que se trate, la cumpla “en el ámbito de su competencia”, no invadiendo la de otras a través de la creación de disposiciones que no están previstas en ley alguna, supuestamente para cumplimentar principios o intenciones constitucionales. Esto ha generado múltiples problemas que están abriendo una riesgosa brecha en el orden constitucional establecido en el artículo 49 que reza: “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

Infortunadamente, tanto el INE como el TEPJF indebidamente se han arrogado *de facto* estas “facultades extraordinarias para legislar” pretendiendo fundarlas en principios constitucionales abstractos que no deben tener aplicación directa en la materia electoral, e invadiendo funciones del Poder Legislativo hasta el extremo de pretender darle órdenes sobre cómo deben configurarse un órgano de especial importancia constitucional como es la Comisión Permanente.

Los legisladores y los juzgadores son igualmente responsables del ejercicio de la soberanía nacional y deben ser extremadamente celosos en el cuidado del sistema institucional dispuesto en nuestra Norma Suprema cuyo respeto tienen a su cargo. Ni unos, ni otros, pueden permitirse incurrir en conductas que alteren ese sistema. Los legisladores impidiendo que se invada su competencia, lo cual desdora al Poder Legislativo que deben ejercer, y los juzgadores evitando ampliar sus competencias al excederse en la función que les ha sido conferida, con lo que acaban demeritando al Poder Judicial.

La judicialización de la política genera la politización de la justicia, fenómeno que preocupa a los estudiosos en diversos países y están buscando fórmulas para combatirlo. El problema no es menor, porque provoca que la política pierda eficacia y la justicia respetabilidad, con el consecuente deterioro de la democracia. Los electores terminan desconfiando de quienes tienen el deber de conducir la vida pública. El remedio pasa por volver a los fundamentos de la teoría de la División de Poderes; los frenos y contrapesos, los controles y equilibrios de que hablaba Montesquieu. Lograr que “el poder detenga al poder”. En ese esquema, cualquier exceso del Legislativo o el Ejecutivo debe ser contrarrestado por el Judicial; pero el desbordamiento de este, debe ser controlado por el Legislativo, sea en el plano constitucional o en el legal.

Este tema tiene una trascendencia gigantesca puesto que así como siempre se ha pugnado porque el Poder Ejecutivo no exceda sus atribuciones en deterioro del Legislativo, es fundamental que los legisladores de todos los partidos unan sus voluntades para preservar las facultades constitucionales que les corresponden. La invasión del territorio legislativo por parte de

autoridades diferentes como lo son: un organismo autónomo estrictamente establecido para organizar las elecciones y un tribunal diseñado para resolver disputas sobre el resultado de los comicios, debería generar en los diputados y los senadores un unánime sentimiento de rechazo, con independencia del sentido que puedan tener las resoluciones de las referidas autoridades, puesto que tal intromisión pone en riesgo la estabilidad del esquema constitucional en su conjunto. La preservación del Poder Legislativo como depositario primario de la soberanía popular, debe ser una preocupación básica de los congresistas que habrán de revisar el tema en el Parlamento Abierto al que se ha convocado.

Redefiniciones interpretativas

Es interesante mencionar, que a través de la mera función legislativa, sin tener que efectuar reformas constitucionales, hay distintos aspectos que pueden ser abordados y resueltos como ya se hizo en el caso de la reforma al artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) en el que se acota claramente la función del TEPJF frente al Legislativo. Desafortunadamente este pretende desconocer un acto legislativo de la máxima autoridad violentando un principio constitucional fundamental. Por esa actitud desafiante, que solo puede conducir a una innecesaria colisión, quizá sí valga la pena llevar a la Constitución disposiciones que delimiten indubitablemente las atribuciones de los órganos involucrados.

Darle al Congreso reglas sobre cómo constituir sus órganos internos es absolutamente contrario al principio de división de poderes y, al poner en riesgo el equilibrio entre los mismos, afecta la noción de Estado de Derecho y pone en riesgo la estabilidad de la República.

Es importante, por lo tanto, que se delimiten con toda precisión las posibilidades interpretativas de que puedan disfrutar las autoridades electorales pues de otra manera serían estas las que decidan quién puede ser candidato y quién no puede serlo, mediante la aplicación de un criterio que está más allá de su alcance.

Para ese fin conviene replantear a escala constitucional la función del TEPJF de manera que se precise en el Art. 99 de la Constitución su competencia exclusivamente como órgano de control de la legalidad de los resultados de las elecciones.

De cualquier manera, un resultado similar podría conseguirse mediante una reforma estrictamente legislativa aplicada a la LGSMIME, en cuyo Art. 2 se incorporaron en 2014 criterios que rebasan las atribuciones constitucionales asignadas al Tribunal y generan una apertura no justificada a la actuación de todas las autoridades electorales. La extensión exagerada que se da a la actividad interpretativa de tales autoridades puede ser acotada si se desarrollan en la ley los principios establecidos en la Constitución para la materia electoral. Estos se encuentran en el Art. 41 en relación con la función estatal asignada al INE cuyo control judicial corresponde al TEPJF, y dicho control, como se indica en la fracción III del artículo 99 constitucional, tiene por objeto resolver las impugnaciones por violaciones a normas constitucionales o legales. En ningún momento se habla de posible violación a “principios” formulados en abstracto en los preceptos constitucionales. De ahí que sean esos principios los que se desarrollen en el Art. 2 de la LGSMIME a la manera que a continuación se señala.

La certeza es el valor primario del Derecho Electoral. En cumplimiento del principio de certeza ninguna autoridad electoral, sea administrativa o jurisdiccional, podrá imponer sanción alguna que no sea estrictamente aplicable a la infracción de que se trate. No podrán realizarse interpretaciones por analogía, por mayoría de razón, sistemáticas, funcionales, ni sustentadas en la aplicación directa de principios constitucionales. Tampoco podrán las mencionadas autoridades imponer a ninguna persona física o moral obligaciones o reglas que no estén exactamente previstas en la ley.

En cumplimiento del principio de legalidad las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deberían carecer de facultades para interpretar de manera directa principios constitucionales o convencionales. El mencionado Art. 99 limita específicamente las facultades interpretativas del tribunal en materia constitucional, a los “preceptos de la Constitución”. Los cuales de en entenderse como órdenes o normas concretas, no principios generales.

En materia electoral la presunción de constitucionalidad de la ley debería ser casi absoluta, por eso la Constitución ya prevé que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la acción de inconstitucionalidad, puede determinar su conformidad o inconfomidad con la Norma Suprema. Este planteamiento sí hace indispensable una reforma al artículo 99 constitucional, pero de cualquier modo la legislación ordinaria puede dejar claro que las únicas

leyes relativas en la materia electoral respecto de cuya constitucionalidad puede pronunciarse el Tribunal son la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente al juzgar sobre actos o resoluciones de las autoridades electorales.

En cumplimiento del principio de objetividad, y dado que la materia electoral está sujeta estrictamente a la ley, las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales deben quedar constitucionalmente impedidas para efectuar control de constitucionalidad o de convencionalidad. Los cuales deben corresponder exclusivamente a los demás órganos del Poder Judicial.

En cumplimiento del principio de imparcialidad, la ley ordinaria dispondría que las acciones afirmativas solo pueden ser establecidas por disposición constitucional o legislativa de carácter federal. Ninguna autoridad electoral tiene la facultad de emitir reglas, ni realizar acciones que favorezcan a grupo específico alguno, si estas no están expresamente previstas en la ley. Esta disposición sí puede desarrollarse en el ámbito legislativo sin reforma constitucional.

Los tribunales electorales deben estar limitados a resolver conflictos sobre el resultado de las elecciones asegurando que estas sean como lo dice la Constitución: auténticas, libres y periódicas. En la aplicación del principio de objetividad, vinculado al de imparcialidad, los tribunales y las autoridades electorales en general no deben tener ninguna intervención en la definición de las candidaturas que resuelvan presentar los partidos políticos. Estos deben tener una total y absoluta autonomía al respecto, siempre cumpliendo los requisitos para la elegibilidad de los candidatos. La autoridad electoral no debe intervenir en el establecimiento de proporciones o fracciones de las candidaturas reservadas para determinados grupos. El favorecer a unos puede perjudicar a otros y ello es contrario al principio de imparcialidad. Es la voluntad suprema de los electores la que debe decidir respecto a quienes tienen mejor derecho para obtener un cargo de elección popular. De otro modo, la autoridad electoral interfiere con la libertad de voto consagrada constitucionalmente.

Aun en el caso de que se supusiera o existiera realmente una exclusión por parte de un partido político respecto un determinado grupo de personas, estas siempre tienen la posibilidad de presentar una candidatura independiente y hacer valer sus derechos frente al electorado.

El principio de paridad de género previsto en la Constitución debe ser también interpretado de manera estricta. El avance alcanzado por el género femenino al punto de que tengamos afortunadamente legislaturas donde priva la paridad de género, muestra la necesidad de acogerse a otro principio que se reconoce en las acciones afirmativas: su carácter temporal. Alcanzado el punto al que afortunadamente se ha llegado en la representación de los géneros en los congresos, la paridad debe ser aplicada de manera rigurosa, de modo que se asegure la postulación igualitaria entre hombres y mujeres y se realice de tal manera que se garantice también la paridad en la integración de los órganos.

Ello implica que deben quedar muy claras las formas de conseguir ese equilibrio dentro de la propia ley y no por medio de decisiones de las autoridades electorales, para que ninguno de los géneros pueda tener más miembros en el órgano colegiado que el otro, salvo en los casos en que el número de integrantes sea impar y en tal circunstancia, se establezca un beneficio para el género femenino ocupando un lugar más que los asignados al género masculino. Las autoridades electorales carecen de facultades constitucionales para modificar el orden en el que fueron electas y electos las personas postuladas por los partidos. Ningún “principio” autoriza a alterar el resultado de la votación emitida por la ciudadanía. En todo caso debe prevalecer el principio supremo del carácter democrático de la República. La modificación de resultados para dar cabida a representaciones de grupo es un rasgo corporativo contrario al sistema democrático de elecciones libres.

La Constitución limita las facultades jurisdiccionales del TEPJF a la revisión de los actos de las autoridades electorales y de los partidos políticos o candidatos por ello basta precisar en la ley esos límites como ya se hizo en la reforma al Art. 10 de la LGSMIME que quizá valdría la pena reformular y ampliar en los siguientes términos: “No procede, ante ninguna autoridad administrativa o judicial, la impugnación de los actos parlamentarios del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitidos por sus órganos directivos o de gobierno, relativos a la integración, organización y funcionamiento de sus comisiones legislativas y comités. Tampoco son impugnables los dictámenes y cualesquiera otras resoluciones que sean competencia de dichas comisiones y comités, ni las elecciones efectuadas para nombrar, designar, objetar o ratificar nombramientos de personas que deban ocupar cargos

para los cuales sea necesaria la realización de tales procedimientos. La remoción de algún servidor público que corresponda a alguna de las Cámaras tampoco podrá ser objeto de impugnación.”

Los legisladores tanto federales como locales no son *governados* para efecto de la aplicación de disposiciones relacionadas con el ejercicio de los derechos humanos de carácter político en virtud de que se trata de personas que ejercen una autoridad pública, exclusivamente sujetas a las disposiciones internas del órgano legislativo de que se trate. Los conflictos internos surgidos en el seno de los órganos legislativos, deben ser resueltos exclusivamente mediante los procedimientos dispuestos al interior de los referidos órganos y contra ellos no conviene que proceda juicio o recurso alguno.

Cuando actúan en su condición de legisladores no pueden considerarse personas sometidas a la autoridad del Estado puesto que son integrantes de un cuerpo colegiado de autoridad. La División de Poderes exige que las eventuales disputas que surjan al interior de dichos cuerpos sean resueltas exclusivamente por ellos, sin intervención de otro poder. Imaginemos que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia decidiera acudir ante el Tribunal Electoral para alegar que su derecho político electoral para intervenir en los asuntos políticos del país ha sido violentado porque los demás Ministros no escucharon debidamente sus argumentos. Evidentemente, cualquier acción que aparentemente redujera el derecho de un miembro de la Suprema Corte, sería totalmente ajena a un juicio en materia del ejercicio de derechos políticos electorales. La misma razón existe para que los legisladores no puedan quedar sujetos, ni por sus opiniones, ni por sus votos en las decisiones que intervengan, a resoluciones emitidas por los órganos de otro Poder. El ejercicio de la soberanía en cada uno de los ámbitos en los que es ejercida por los Poderes de la Unión, no puede quedar sujeto a la revisión o supervisión de otro de dichos Poderes en respeto al principio de División de Poderes.

Al respecto, debería quedar claro que el recurso relativo a los derechos político-electorales de los ciudadanos no puede ser ejercido por los integrantes de los órganos legislativos y habría que analizar la posibilidad de tampoco dar la legitimación correspondiente a las personas afiliadas a los partidos. Valdría la pena considerar la posibilidad de eliminar dicho recurso y ello sí requeriría un cambio constitucional. También podría hacerse un desarrollo legislativo de menor

alcance que el actual para que fuese empleado solamente a fin de combatir la no inscripción en el padrón o la cancelación de un registro como candidato ya conseguido, puesto que la Constitución se refiere específicamente a los derechos “de votar y ser votado”. También alude al derecho de afiliación libre y pacífica, de modo que solo podría emplearse el recurso para oponerse a algún intento de afiliación forzosa a un partido o agrupación políticos.

Los derechos humanos en materia político-electoral están sujetos a las disposiciones legales de cada país. No se trata de derechos inherentes y absolutos atribuidos a las personas ya que derivan de la manera como se organiza políticamente cada nación. Corresponde a la Constitución nacional, definir las condiciones que permiten otorgar la ciudadanía. Por esa razón no deberían quedar sujetos a un control de convencionalidad.

La jurisdicción electoral solo debe comprender facultades de anulabilidad de actos realizados por las autoridades administrativas o judiciales que regulan los procesos electorales. Toda declaración de nulidad debe estar fundada en causas expresamente previstas en la ley. La anulación decretada en contravención de lo previamente señalado deberá tipificarse como delito grave, porque implica una violación al derecho ciudadano a votar y elegir libremente, el cual constituye la base del carácter democrático de la República.

Por la misma razón debe preverse que solamente las autoridades judiciales penales podrán aplicar como pena la pérdida de cualquier derecho de ciudadanía. La sanción correspondiente debe estar claramente establecida en un tipo penal cuya constitucionalidad podrá ser impugnada por medio de la acción de inconstitucionalidad por los actores legitimados para ello, o a través del amparo por quien sea imputado por el delito que puede dar lugar a dicha sanción. El examen sobre sus constitucionalidad considerará la proporcionalidad de la medida para constatar que esta no resulte violatoria del artículo 22 en cuanto a que pueda estimarse como una pena inusitada. La descripción típica correspondiente debe ser muy precisa, la pena eventual de pérdida de derechos ciudadanos debe quedar prevista expresamente en cada caso. No podrá establecerse como sanción de ninguna índole la pérdida genérica del modo honesto de vivir para privar a alguien de sus derechos ciudadanos. Las autoridades electorales no pueden en ningún caso pronunciarse sobre el cumplimiento del requisito constitucional de tener un modo honesto de vivir para el goce y ejercicio de los derechos ciudadanos.

La idea de interpretar directamente la Constitución para concluir que una infracción electoral pueda conducir a la pérdida de la ciudadanía, por el expediente de determinar que, quienes se encuentra en el supuesto legal teóricamente violado, pueden ser privados de la presunción del modo honesto de vivir es un exceso inadmisibles.

Además debe eliminarse la práctica de elaborar listas o registros de infractores que tiene carácter inconstitucional pues constituye una pena infamante.

Se suele argumentar que todo acto de autoridad debe estar sujeto a la revisión jurisdiccional. Eso no es cierto pues existen situaciones previstas en la Constitución por virtud de las cuales hay actos que son definitivos e inatacables y contra ellos no procede juicio o recurso alguno. En esos casos justamente se trata de preservar la división de poderes y es evidente también que las resoluciones de última instancia de la Suprema Corte no pueden ser revisadas de manera directa, si bien los criterios jurisprudenciales pueden ser modificados a través de la acción del legislador. De manera que hay casos en que el ejercicio de las más altas atribuciones políticas puede dar lugar a que se resuelvan diferendos que no están sujetos a una revisión judicial.

Jurisdicción sobre los partidos

Debe revisarse el estatus de los partidos políticos en relación con la intervención del Poder Judicial en sus asuntos internos. En cumplimiento del principio de imparcialidad y dada la delicada naturaleza de la materia electoral, en la cual cualquier desviación respecto de los contenidos estrictos de la ley puede ser interpretada como una acción de parcialidad, es necesario revisar el régimen jurídico de los partidos políticos a fin de garantizarles el máximo de autonomía en sus decisiones. Prácticamente ningún conflicto interno de los partidos políticos debería ser judicializable porque en ese momento se politiza de inmediato la justicia. Los políticos siempre tienen a su disposición procedimientos precisamente políticos, la presión, la negociación, la denuncia pública, la disidencia, la ruptura, etc. para enfrentar reales o supuestas injusticias cometidas contra ellos por otros actores de la escena política, incluidos los directivos del partido en que militan. La alta función de los jueces electorales debe estar al servicio de la validez y eficacia del voto de los ciudadanos, no convertirse en instrumento de las rencillas y reyertas entre políticos.

La actividad política da lugar a consensos y disensos y siempre tienen los miembros de un partido político la posibilidad de romper esa relación que no es forzosa. Nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización política, ni se le puede impedir desafilarse. La existencia de las candidaturas independientes, permite a toda persona su participación en los procesos electorales, pertenezca o no a un partido político. La eventual aplicación de una decisión injusta en el seno de un partido puede ser superada por la actividad política que los disidentes decidan efectuar fuera de él, incluso vencerlo en las urnas, que constituyen el órgano supremo de justicia electoral. Mientras menos intervengan los órganos jurisdiccionales en este tipo de disputas, se protege mejor al Poder Judicial y se deja que la democracia actúe por sí misma. Las nociones aplicables al mercado, en cuanto a que sean los consumidores quienes tomen las decisiones, conviene seguir las en la materia electoral para dejar que los ciudadanos al acudir a las casillas resuelvan las diferencias que pueden haber ocurrido al interior de los partidos políticos.

Existe en nuestro Derecho Constitucional un régimen de plena y absoluta autonomía otorgado a determinadas asociaciones, como son las religiosas. Evidentemente la designación de un obispo o la separación de un párroco de sus funciones, quedan totalmente excluidos de la posibilidad de participación del Poder Judicial. Con una mínima limitación, el texto constitucional también fija un régimen autonómico a los partidos. De ahí que el legislador ordinario puede dar la mayor extensión posible a la capacidad decisoria de los partidos e incluso cabría considerar darles en la Constitución el mismo tratamiento que a las asociaciones religiosas.

Precedentes no jurisprudenciales y Derecho de Iniciativa

En estricto rigor constitucional el Tribunal Electoral no necesariamente tendría que estar facultado para establecer jurisprudencia. Es verdad que la posibilidad genérica de que lo haga aparece en el Art. 94 constitucional, pero es la Ley Orgánica del PJF la que le confiere esa facultad, por lo que una reforma legislativa podría suprimirla dados los efectos de carácter general que adquiere, frecuentemente sin sustento constitucional. Por eso sus resoluciones en cada caso concreto podrían constituir precedentes utilizables en las argumentaciones de los litigantes pero no fijar un criterio con carácter definitivo que puede dar lugar también a la invasión de las funciones legislativas.

El Poder Judicial del Estado, por bien del propio Poder Judicial, por bien del Estado, por bien de la política y por bien de la democracia, debe detenerse a las puertas de los órganos legislativos y los partidos políticos, al igual que lo hace a las puertas de las iglesias.

Como contrapartida a la rigurosa aplicación de los principios que rigen la materia electoral sería útil dotar a las autoridades electorales del derecho de iniciativa en materia de legislación electoral, incluyendo la posibilidad de proponer reformas constitucionales.

La iniciativa otorgada a las autoridades electorales sería de dos tipos: una la de solicitar al Congreso de la Unión la interpretación de alguna norma en la que pudieran surgir dudas sobre su aplicación y, en ejercicio de lo previsto en el inciso F del artículo 72 constitucional, las Cámaras determinarían la interpretación aplicable a la norma dudosa. Para ese efecto sería necesario incluso convocar a un periodo extraordinario a fin de que en un tiempo determinado por la Constitución, el Congreso debiese tomar una decisión interpretativa y en caso de no hacerlo en el término fijado, la autoridad correspondiente quedaría en libertad de formular la interpretación siempre respetando los límites impuestos en el artículo 10 de la LGSMIME.

La segunda posibilidad sería que derivada de su actividad jurisdiccional y administrativa las autoridades electorales pudiesen iniciar reformas o adiciones que permitieran atender temas que legislador no hubiese previsto suficientemente. Así el impedimento de ejercer funciones legislativas directas por parte de las autoridades electorales, quedaría compensado por la posibilidad de proponer o inducir aquellas modificaciones en la normatividad que deben aplicar, a efecto de facilitar la resolución de los problemas que hubiesen detectado.

Campañas y precampañas

En cuanto a las campañas, es necesario revisar la posibilidad de que todas los medios de propaganda, al igual que se hace con la radio y la televisión, sean constitucionalmente determinados por la autoridad electoral administrativa, la cual cubriría los gastos correspondientes como parte del financiamiento público partidista. Esta autoridad pondría a disposición de los partidos y los candidatos independientes un determinado número de espacios

publicitarios a la manera de los espectaculares o las bardas, que serían los únicos susceptibles de emplearse.

La hiperregulación que se ha efectuado en el Derecho mexicano ha incrementado la politización de la justicia y pone en riesgo la aplicación de los principios a los que están sujetos todas las autoridades electorales.

Un aspecto que valdría la pena considerar es eliminar el concepto de precampaña ya que en un sistema democrático por definición los políticos están siempre realizando actos tendientes a mantener el favor del electorado particularmente cuando se ha establecido la posibilidad de reelección.

Impedir a los políticos que hagan política es una tarea que no le puede corresponder al Poder Judicial. Por eso habría que eliminar las restricciones para dejar que los servidores públicos puedan acudir en cualquier momento a actos de naturaleza política e incluso de promoción personal. Siempre y cuando no se emplean para ello los recursos públicos. Las referencias a la promoción personal también deben ser eliminadas del artículo 134 pues solo se prestan a judicializar disputas inter o intrapartidistas que desplazan al campo jurisdiccional lo que debe ser la competencia abierta entre todos los actores políticos. Evidentemente un político en funciones tratará de resaltar los logros alcanzados y cualquier acción en ese sentido puede dar lugar a conflictos que solo entorpecen y dificultan la competitividad política. En este campo, a la manera de la economía, es también el mercado de los electores el que debe tomar las decisiones y debe darse la mayor libertad posible a los actores políticos.

Así como estos se encuentran limitados sus derechos en cuanto a tener que resistir mayores embates de críticas e incluso expresiones que para otras personas darían lugar a la alegación de un posible daño moral, esa limitación a la que están sujetos debería ser compensada con la ampliación de su libertad para manifestarse de todas las maneras posibles frente a una ciudadanía que es lo suficientemente madura para decidir si alguien está abusando de su posición o tratando de engañar a los electores. La única limitación clarísima debe ser la que impida el uso directo de dinero o bienes públicos para realizar actos de promoción electoral.